

Chiapas: reestructuración y cambio

Luis Hernández Navarro*

Muchas de las reformas requeridas para resolver de fondo el conflicto chiapaneco son también acciones necesarias para la modernización nacional. Lo peor que podría suceder es que se hiciera una lectura de la guerra chiapaneca como si las causas que las originaron no estuvieran presentes también en el resto del país. Es el momento de poner a tono el sistema político nacional con la madurez de la sociedad. De no hacerlo, estaremos en riesgo de padecer nuevas explosiones.

De guerras campesinas

Si por su programa y por los efectos que ha generado su levantamiento militar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se ha constituido en una fuerza política nacional, su espacio de acción y su instrumento principal de lucha es el de ser una guerra campesina circunscrita a algunas regiones del estado de Chiapas. Aunque es muy probable que como ellos mismos lo han declarado, estén implantados en otras partes de la República y sean capaces de llevar la guerra a ellas, es el territorio chiapaneco el terreno principal de su acción.

Esta guerra campesina se alimenta tanto de casi 20 años de movilizaciones rurales prácticamente interrumpidas en el estado, como de una tradición de revueltas indígenas más o menos cíclicas. Expresan la enorme dificultad de la sociedad chiapaneca para resolver un conjunto de contradicciones complejo: entre Chiapas y gobierno federal, entre las distintas etnias y los grupos de poder locales y el Estado Nacional y, entre los pequeños productores rurales y los grandes finqueros. Estas movilizaciones rurales han asumido, dependiendo de la región y el tiempo en el que han transcurrido, la forma de reivindicaciones étnicas o de expresiones campesinas. Han buscado recuperar la tierra, apropiarse del proceso productivo, enfrentar la represión, democratizar los poderes locales o encauzar los mecanismos de procuración

de la justicia. Se han expresado como comunidades, como organizaciones sociales, como partidos políticos, como movimientos ciudadanos o como levantamientos armados. Sus direcciones han sido autónomas, aunque también, han sido utilizadas con frecuencia para dirimir disputas por el poder de la "familia chiapaneca" —esto es, dentro de la clase política de aquel estado.

El corazón del asunto

En el corazón del conflicto rural chiapaneco se encuentra una solución "diferida" y parcial de la cuestión agraria en la entidad. Mientras que existen estados de la República en los que en los hechos el latifundio está prácticamente erradicado, casi el 30% del rezago agrario nacional sigue concentrándose en Chiapas.

Dos hechos muestran con claridad la gravedad de este problema. Según el censo de Inmecafé de 1992, Chiapas es el principal productor de café en el país: 73 mil 742 productores siembran 228 mil 264 has, del aromático. Poco más de 100 personas (que representan el 0.16% del total de productores) concentran, sin embargo, el 12% de las tierras. En varios casos, con el objetivo de eludir los ordenamientos constitucionales sobre las extensiones máximas de la pequeña propiedad, los predios se encuentran a nombre de terceros. Evidentemente, estas propiedades concentran las mejores tierras, el crédito (y ahora las deudas) y la infraestructura.

* Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras.

El problema principal, empero, no se encuentra en este sector, sino en las grandes extensiones ganaderas. Según datos de 1980, poco más de 6 mil familias ganaderas detentan más de 3 millones de has, esto es, casi la mitad de la superficie con la que cuenta el conjunto de la sociedad rural. A comienzos de la década de los setenta, Chiapas concentraba el 37% de las fincas ganaderas existentes en todo el país. Evidentemente, estas propiedades concentran los pastos naturales y cultivados. Salvo escasas excepciones, la mayoría de estos finqueros, han basado la obtención de ganancias en la combinación de grandes extensiones y bajo costo de la mano de obra. Por lo demás, el conflicto por la tierra entre ganaderos y campesinos tiene su origen no sólo en la solicitud de los peones de que se repartan los latifundios, sino también en la invasión de los ganaderos de terrenos ejidales y nacionales.

El enfrentamiento entre unos y otros ha convertido a la lucha por la tierra en un asunto de nota roja. Las amenazas, encarcelamientos y muertes, en ocasiones a manos de los guardias blancas de los finqueros, en ocasiones como resultado de la intervención militar o judicial a favor de ellos están plasmados no sólo en el memorial campesino de la región, sino que han sido documentados por diversos organismos de derechos humanos internacionales (Amnistía Internacional y America's Watch,

entre otros). En el Club de Leones de Ocosingo, podía leerse en 1971 un letrero que decía:

“La Ley del Monte ordena que
al indio y al zanate...
se le mate.”

Más allá del conflicto directo por la tierra, la problemática agraria está enredada por otros factores: dotaciones empalmadas, ejecuciones existentes sólo en planos, resoluciones presidenciales sin ejecución.

Los voceros oficiales pueden señalar los “grandes avances” en la solución del rezago agrario en la entidad, o, ignorar en sus análisis sobre el origen del conflicto agrario el problema de la tierra. Los hechos, sin embargo, muestran otra cosa, de la misma manera como señalar que la precipitación por aprobar las pasadas reformas al 27 Constitucional y los oídos sordos a las protestas de amplios sectores de la sociedad mexicana contra esas modificaciones, tenían alguna razón.

Las redes de poder

La concentración de la tierra y los recursos naturales en unas cuantas manos ha generado, adicionalmente, una



FOTO: HECTOR HERNANDEZ/ICONOS.

maraña de grupos de interés que han copado los puestos de representación popular en la región. La “familia chiapaneca” –salvo notables excepciones– está constituida precisamente por los grandes ganaderos, cafetaleros y talabosques, que han destinado los recursos públicos para su beneficio personal.

Los nombres de los más recientes gobernadores del estado coinciden, asombrosamente, con estos grupos de interés. No se trata de funcionarios que gobiernen al servicio de ellos, sino, propietarios directos que asumen su representación directa.

Los cacicazgos tienen, en todas las regiones, nombres y apellidos. Un solo ejemplo: el primer líder estatal de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC durante la administración de Patrocinio González Garrido fue Jorge Felino Montesinos Melgar, hombre fuerte de Motozintla. Su fuerza económica proviene del control del transporte en la región. Este representante de los campesinos chiapanecos ha sido, entre otras cosas, tres veces Presidente Municipal y actualmente es diputado federal. Las ramificaciones de su influencia llegan lejos: su esposa es la Oficial del Registro Civil en la región, su compadre, Hermelindo Jan Robiero, es Recaudador de Hacienda, su cuñado es Presidente Municipal de Siltepec, su sobrino es Presidente Municipal de la Grandeza, su compadre es Presidente Municipal de El Porvenir... Las dependencias gubernamentales que operan en la región consultan con él para los trabajos que deben desarrollar.

Estas redes de poder son, sin embargo, diferentes en la región de los Altos. Allí, salvo excepciones significativas, existen un número relativamente elevado de cacicazgos indígenas, muchos de ellos, maestros bilingües. Estos cacicazgos controlan usualmente el comercio del trago, del refresco, de las flores, de la velas y de los cohetes y se benefician directamente de los rituales tradicionales donde se deben consumir estos productos. Usualmente, tienen también el control del transporte y del arrendamiento de tierras. Controlan los comités municipales del PRI y de la CNC. La conservación de esta etnicidad y de las prácticas religiosas asociadas a ella son un instrumento clave de dominación. Las disidencias, que muy frecuentemente se expresan como diferencias religiosas que cuestionan los mecanismos de acumulación caciquil –protestantismo que se niega a participar en el financiamiento de las fiestas a los santos–, es sancionado con la expulsión de la comunidad y la expropiación de sus tierras.

Ambos tipos de cacicazgo han encontrado en sus reivindicaciones de autonomía regional un terreno privilegiado para frenar los intentos por promover la modernización de estos mecanismos de dominación desde el gobierno central. La reivindicación de Chiapas para los chiapanecos –más allá de su justeza ante un excesivo centralismo presente en todo el país– ha sido el instrumento para impedir la alianza entre movimientos democratizadores desde abajo y presencia federal. De la misma manera, en el marco de las guerras centroamericanas, las

élites locales “vendieron” al gobierno federal la idea de que la estabilidad del estado pasaba necesariamente por su fortalecimiento. Los resultados de estas políticas están hoy a la vista.

La insurgencia campesina

Pocos movimientos campesinos han tenido en el país la persistencia y capacidad organizativa de la insurgencia rural chiapaneca. La energía social desplegada no ha tenido, empero, resultados necesariamente positivos.

En ciclos de movilización y construcción organizativa sostenidos, los campesinos chiapanecos han formado algunas de las organizaciones regionales más significativas del país. Fueron los primeros en iniciar la lucha de los pequeños productores de café contra el Inmecafé y en ensayar el paso a la autogestión campesina en el sector. Fueron la segunda organización del sector social rural en formar una Unión de Crédito. Han sido pioneros en el impulso al café orgánico –junto con los productores oaxaqueños de UCIRI– y en buscar canales de comercialización alternativos.

A partir de 1974 la lucha y la organización campesina en el estado comienza a extenderse y generalizarse. Diversos factores influyeron en ello: la contratación de entre 15 mil y 30 mil trabajadores guatemaltecos eventuales por parte de los grandes finqueros con salarios menores a los que tradicionalmente pagaban a los migrantes provenientes de la región de los altos. El crecimiento demográfico y el desempleo y la presión sobre la tierra asociada a él. La emigración de casi ochenta mil refugiados guatemaltecos que huían de la guerra sucia en su país a la región. El agotamiento de la frontera agrícola y el desajuste ecológico provocado por una colonización desordenada de la selva. La acción pastoral de la Iglesia Católica inspirada por la Teología de la Liberación. La realización del Congreso Indígena en San Cristóbal para conmemorar el quinto centenario del natalicio de fray Bartolomé de las Casas. La implantación de diversas corrientes políticas en el estado de vocación hacia la promoción organizativa de base (entre otros: Línea Proletaria, Unión del Pueblo, CIOAC-PCM, PST). El desarrollo de un amplio movimiento sindical democrático entre el magisterio estatal (a partir de 1979) y un papel activo de amplias franjas de ellos como “intelectuales orgánicos” del campesinado, etc.

Como resultado de estas iniciativas surgen tres grandes polos programático-organizativos y un sinúmero de organizaciones y luchas de menor impacto o persistencia. Los primeros son: la *Unión de Uniones Ejidales y Grupos Campesinos*, implantada básicamente en la Selva Lacandona, la Zona Norte y la Sierra Madre, que orienta su actividad principal hacia la lucha por la apropiación campesina del proceso productivo y desarrolla hacia el Estado una política de movilización y negociación que busca evitar la confrontación directa. La *CIOAC*, que concentra

su trabajo en la organización de jornaleros y sindicatos agrícolas de fincas cafetaleras y ganaderas de los municipios de Simojovel, Huitiupán y El Bosque, y busca vincular esa lucha con las actividades programáticas y electorales del antiguo Partido Comunista y posteriormente con el *PSUM* y, los comuneros del municipio de Venustiano Carranza y posteriormente *OCEZ*, que hacen de la lucha por la tierra y contra la represión y de la confrontación con el Estado sus principales demandas y líneas de acción.

Entre los segundos se encuentran: la *Alianza Campesina 10 de abril* que, entre 1974 y 1976 protagonizó en la Frailesca, movilizaciones por la tierra. El persistente conflicto contra el cacicazgo disfrazado de problema religioso en el municipio de San Juan Chamula. El levantamiento de 3 mil indígenas armados con machetes en San Andrés Larrainzar. La *Alianza Campesina Revolucionaria* que efectuó 27 invasiones agrarias en la Costa. La lucha del Pacto Ribereño contra *Pemex*. El trabajo agrario-electoral de fuerzas como el *PST-UNTA* con tomas de tierras y enfrentamientos sangrientos, y el *PRT-CCRI*, etc.

Estas luchas tuvieron resultados distintos. Mientras que algunas obtienen satisfacción parcial a sus demandas (*Unión de Uniones*), a otras se les reprime. En el camino, muchas de estas organizaciones se dividen, en parte como resultado de la diversidad de opiniones e intereses entre sus miembros y, en parte también, como resultado de la acción del Estado sobre ellas. Los grandes polos organizativos, aunque golpeados, permanecen actuando.

Del segundo ciclo a la lucha armada

Un nuevo ciclo de luchas campesinas se desata entre 1980 y 1989 como resultado de la lucha magisterial por democratizar a su sindicato y por vincularse a los productores rurales. El sindicato magisterial da a una multitud de conflictos cobertura política y un canal para la solución de sus conflictos. La intención de miles de profesores de "vincularse al pueblo" permite recoger centenares de conflictos latentes en las comunidades y catalizar el proceso organizativo para solucionarlo. La práctica sindical democrática y la táctica de lucha impulsada por el magisterio sirvieron como referencia para impulsar esta reanimación. La demanda "levantada" por el magisterio democrático no tenía un eje organizativo preciso pero "calentó" el ambiente político. Finalmente en 1986, la convergencia en la lucha por buscar un incremento a los precios de garantía de maíz entre la Asociación Agrícola La Frailesca y el movimiento magisterial democrático fue reprimido y sus siete principales dirigentes encarcelados. Movimientos similares, por las mismas demandas y con las mismas tácticas de lucha, en los estados de Chihuahua y Nayarit, habían arrancado soluciones negociadas favorables. Hacia agosto de 1989 esta corriente había organizado la realización de 5 encuentros

campesinos magisteriales con la participación de representaciones o núcleos de 400 comunidades. La intentona de la organización formada en este proceso (Solidaridad Campesino-Magisterial) de promover la democratización rural ganando los comités municipales del PRI y las presidencias municipales en zonas indígenas y que le permitió la conquista tempranera de 14 municipios durante los comienzos de la administración de Patrocinio González Garrido, terminó con el encarcelamiento de varios de sus presidentes municipales acusados de corrupción—algunos justificadamente, otros como revancha política— y el asesinato de uno de ellos, a manos del cacicazgo local. Y cierra un ciclo de luchas.

Un nuevo ciclo de luchas se abre el 12 de octubre de 1992 alrededor de una impresionante manifestación realizada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el marco de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia Indígena y Popular. Miles de campesinos pertenecientes a diversos grupos étnicos tomaron las calles coletas y derrumbaron y destruyeron el símbolo de los antiguos conquistadores: la estatua de Diego de Mazariegos. A juicio de algunas de las fuerzas participantes en esta nueva etapa la que la solución de los problemas indígenas sólo podría provenir de lucha armada. Las enormes movilizaciones realizadas durante ese mismo año por *Xi'Nich* de Palenque y por miles de campesinos exigiendo la liberación del cura de Simojovel, Joel Padrón, las reformas verticales y autoritarias al Artículo 27 Constitucional que en el caso de Chiapas se tradujeron en la división de la *CIOAC* inducida por el gobierno estatal, habían mostrado el agotamiento de la lucha legal.

Quienes impulsaron la necesidad de pasar a los fierros tenían un firme trabajo de implantación social básicamente en la Selva Lacandona y en algunas comunidades de Los Altos y crecieron "debajo de la hierba" reclutando cuadros claves del conjunto de organizaciones sociales que operaban en esa región. El alzamiento estaba justificado por la explosiva combinación de rezago agrario, carencias sociales, atrofia institucional, cacicazgo, deformaciones monstruosas en la procuración de la justicia y falta de democracia. La lección parecía ser clara: si solucionar pequeños conflictos locales en Palenque y Simojovel había requerido de una enorme movilización nacional, la atención al conjunto de contradicciones en Chiapas sólo era posible mediante una transformación profunda no sólo de las relaciones de poder en ese estado sino de una democratización integral del país.

En el corazón del conflicto

Aunque la colonización de la Selva fue inicialmente promovida por las grandes compañías madereras que la explotaban y por la posibilidad de obtener un empleo, su poblamiento se intensificó como una respuesta a las demandas de reparto agrario en otras regiones. Sea porque fueron trasladados a la región provenientes de otras partes

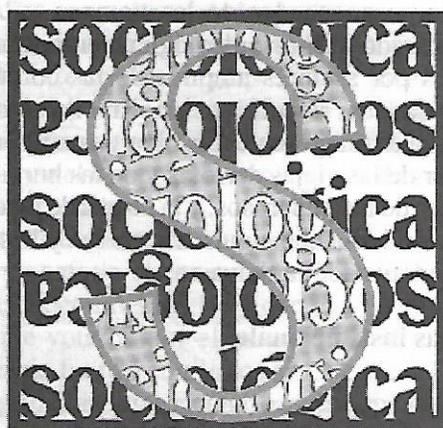
Mayo-agosto 1993

año 8 número 22

ISSN 0187-0173

sociológica

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO División de Ciencias Sociales y Humanidades
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA

de Chiapas —y también de otros estados— por parte de la burocracia agraria o porque fueron “expulsados” de las fincas, un gran número de colonizadores de la Selva a partir de los cuarentas llegaron a ellas como los derrotados en la lucha agraria, como aquellos que no habían podido recuperar la tierra de los finqueros en un país en el que la reforma agraria era un mito viviente. Empezaron un verdadero éxodo, forzado como todos los éxodos.

En la empresa de levantar comunidades y vidas donde no las había contaron con la presencia y acompañamiento de la Iglesia católica, y con la ausencia notable de las instituciones gubernamentales. La religión se convirtió así en uno de los cementos claves que cohesionaron a las nuevas comunidades. Por lo demás, la Iglesia católica se desarrolló en la región con un peculiar respeto de las costumbres populares, o sea, con un fuerte sincretismo religioso. Así las cosas, los catequistas se convirtieron en elementos claves no sólo en la transmisión de “la palabra de Dios”, sino en la vinculación de las comunidades con el exterior. Letrados y con movilidad, muchos de ellos con dominio del castellano, claramente se convirtieron en los “intelectuales orgánicos” de sus congregaciones.

El segundo elemento que dio cohesión a las comunidades fue la combinación de la lucha por la regularización de la tierra y la lucha por los servicios. En 1972 Echeverría promulgó un Decreto Presidencial mediante el cual otorgaba la propiedad de 614,321 has. a 66 familias lacandonas, desconociendo los derechos que tenían sobre

la tierra 26 comunidades indígenas de otros grupos étnicos. Fue hasta 1987 cuando se sentaron las bases para solucionar este conflicto, y hasta enero de 1989 cuando se expidió la resolución presidencial beneficiando a las comunidades afectadas. En el camino se desarrollaron también fuertes conflictos con los grandes ganaderos que despojaban de tierras a los campesinos, usaban la violencia contra ellos y los acusaban de promover invasiones. La identidad social que surgió de esta confrontación está así alimentada por un interminable memorial de agravios.

En el marco de la lucha por la tierra y por los servicios estuvieron presentes permanente dos caminos distintos. Las de quienes impulsaron la formación de organizaciones democráticas de resistencia y buscaron promover la autogestión campesina, y la de quienes consideraron que esto era necesario pero insuficiente y que sólo el cambio de sistema por la vía armada podía solucionar los problemas de fondo. Nacieron así de la primera posición organizaciones como la *ARIC-Unión de Uniones* y de la segunda visión el hoy *EZLN*.

Durante años la vía de la autogestión campesina se impuso en la región como el terreno principal de la lucha, a pesar de que tuvo que enfrentar la cerrazón de diversos gobiernos locales. Sin embargo, a partir de hace unos tres años, esta posición comenzó a perder paulatinamente influencia entre los habitantes de la región.

Diversos hechos influyeron en ello. Por un lado los continuos conflictos con los finqueros y sus guardias blancas. Aunque éstos perdieron control territorial mantuvieron el control de la mayoría de los pastos naturales, de los cultivos y del ganado. Monopolizaron las instancias de poder local y usaron en su beneficio casi exclusivo los recursos públicos, al tiempo que bloquearon los recursos que se trataba de hacer llegar a las comunidades a través de programas federales. Acostumbrados a obtener ganancias rápidas y fáciles gracias a los bajos costos de la tierra y la mano de obra —casi no invierten en sus fincas— al llegar la crisis responsabilizaron de ella a los campesinos, y concentraron en ellos nuevas agresiones. Por lo demás respondieron con una violencia inaudita (cárcel, muertes, amenazas) a los grupos que solicitaban sus tierras. El rencor social creció alimentado de esta violencia y de una profunda discriminación racial. Esos grupos de interés contaron en su cruzada anticampesina con el aval y el apoyo de los gobiernos locales y de diversos funcionarios federales. Les ofrecían a cambio, entre otras cosas, “estabilidad social”.

El segundo terreno sobre el que se alimentó la insurrección fue la crisis económica. Durante años, cuatro fueron los productos más importantes generados en la región: la madera, el café, el ganado y el maíz. Los ingresos provenientes de estas actividades se han deteriorado drásticamente. La veda forestal decretada en 1989 quitó a los habitantes de la región una fuente de ingresos. La caída internacional de los precios del café (de 120-140 dólares las 100 libras 1989 hasta un promedio de 60-70

dólares) y la política macroeconómica redujeron en cinco años los ingresos de los productores en un 65%. El retiro del *Inmecafé* desmanteló en varias regiones canales de comercialización y asistencia técnica. La crisis de rentabilidad de la ganadería golpeó adicionalmente a la región. El deterioro de la productividad del maíz como resultado del crecimiento de la población y de una rotación en la tumba, roza y quema de ciclos de treinta años a ciclos de dos años redujo el acceso a comestibles. Miseria sobre miseria, *Pronasol* pudo paliar muy limitadamente los efectos de esta caída en el ingreso y de la falta de empleos.

El tercer factor que explica la explosión tiene que ver con la ausencia de voluntad gubernamental para resolver el problema de fondo, es decir, para desmantelar la maraña de intereses económico-políticos que generaron el conflicto. Durante años, los gobiernos estatales bloquearon las iniciativas de reforma desde el centro (sólo unas cuantas pudieron pasar en diversas coyunturas). Por lo demás, en muchas de esas iniciativas había la pretensión de que las élites locales podían ser impulsores de la modernización. Por si fuera poco, el actual desmantelamiento institucional presentado como Reforma del Estado, ha creado un vacío ocupado sólo muy limitadamente por las organizaciones democráticas.



FOTO: ELOY VALTIERRA/CUARTOSCURO.

En esas condiciones, las opciones organizativas que luchan por la autogestión campesina tuvieron, a pesar de su esfuerzo y su capacidad de innovación, muchas dificultades para revertir esta situación de profundización en el empobrecimiento.

El proyecto político-militar, enraizado en la región desde hacía años por un trabajo tenaz y disciplinado —y no externo a él o formado por extranjeros—, alimentado por las prácticas comunitarias —a las que en un principio se disciplinó—, conocedor de los tiempos y la cultura indias, preparado militar e ideológicamente, con cuadros reconocidos por sectores amplios de las comunidades, pudo desencadenar la sublevación. En ella se mezcla la desesperanza de un presente terrible y de un futuro incierto, el rencor de las viejas derrotas y de las humillaciones permanentes de los poderosos, y la utopía de reconquistar la gran nación india que alguna vez se fue y la seguridad de haber conquistado la Selva.

Las atrofias institucionales

Se ha señalado que en su origen la explosión fue generada por la suma de tres problemas básicos: una profunda confrontación social entre una franja de finqueros y ganaderos (muchos de ellos latifundistas) y las comunidades campesinas e indígenas por el control de la tierra y los recursos naturales, en el contexto de un estado básicamente agropecuario. Un enorme rezago social que se materializa en una situación de pobreza extrema generalizada a amplios sectores de la población. Y un clima de violencia y discriminación racial que convierte irremediablemente a las luchas sociales en asunto de nota roja.

A este piso de problemas hay que añadir uno nuevo en el que están ubicados tres nudos adicionales: el funcionamiento de las instituciones gubernamentales encargadas de promover el desarrollo, el poder judicial y, la ausencia de democracia.

Sin un tejido social intermedio significativo, la confrontación entre los finqueros y ganaderos de un lado, y, los indígenas y campesinos mestizos de otro, se ha expresado con particular virulencia. En ese contexto, las instancias organizativas e institucionales que buscaron “civilizar” el conflicto durante los últimos veinte años han sido hostigadas, desmanteladas o paralizadas. Las organizaciones campesinas democráticas, la iglesia católica y las diversas iglesias evangélicas, las agencias gubernamentales federales de desarrollo (particularmente el *INI*) y, algunas *ONGs* que han tratado de dar cobertura o ayudar a solucionar la problemática rural han sufrido, en distintos momentos, los embates del gobierno estatal. El recurso de las armas fue utilizado por miles de indios al ver cerrados los canales institucionales para solucionar sus demandas.

Con pocos espacios institucionales de defensa, los campesinos en conflicto se han enfrentado a un Poder Judicial al servicio de los intereses de los poderosos.

Desde el Código Penal del estado que en su Artículo 8 castiga a los actores intelectuales de los supuestos delitos y en el 135 la ocupación de plazas públicas, hasta un sistema penitenciario, en el que los presos están hacinados y permanecen encarcelados sin juicio durante meses, pasando por una policía judicial permanentemente señalada como responsable de una enorme cantidad de abusos y violaciones a los derechos humanos, las instancias encargadas de hacer cumplir la ley y algunas leyes estatales funcionan en contra de los indígenas y sus comunidades. La prensa nacional reportó la intentona, de un reo del penal de Cerro Hueco, de prenderse fuego a sí mismo como protesta por sus condiciones de reclusión. Prácticamente todas las organizaciones campesinas democráticas que actúan en el estado tienen miembros de sus organizaciones encarcelados.

La falta de democracia ahoga a la sociedad chiapaneca tanto como asfixia al conjunto de la sociedad nacional. Las cifras electorales de 1991 dan cuenta de municipios enteros que votaron por el partido oficial a pesar de la existencia de fuertes conflictos sociales en su interior.

Así las cosas, con pocos canales para negociar la demanda social, con instituciones gubernamentales esclerotizadas, con pocas coberturas organizativas, con un Poder judicial con funcionamiento irregular y adverso a los campesinos, con espacios democráticos muy restringidos, lo sorprendente no es que el levantamiento armado del EZLN haya desencadenado una sublevación popular sino que la explosión generalizada de descontento no se hubiera producido antes.

El conjunto de esta problemática nos remite con claridad a los nudos que hoy se deben desbaratar para frenar la violencia en ese estado. En primer lugar, una reforma agraria que resuelva de fondo el rezago y desmantele las bases territoriales de la dominación de finqueros y ganaderos. En segundo lugar, un profundo plan de desarrollo regional acompañado de una significativa derrama económica —asistencial y productiva— que permita disminuir la situación de atraso y pobreza extrema en el estado.

Pero estas dos medidas deben ir acompañadas de otro paquete de reformas adicionales. De entrada urge una remoción de los funcionarios claves de las agencias estatales de desarrollo que expresan los intereses de las fuerzas más retrógradas en el estado y su sustitución por funcionarios honestos y competentes. Asimismo, se requiere de una profunda reforma institucional en la que se incorpore a los indígenas y campesinos —y a sus organizaciones— al diseño, aprobación, ejecución y contraloría de los programas de desarrollo rural. Múltiples experiencias en el estado muestran que en las organizaciones de productores hay la madurez suficiente para hacerlo.

En cuarto término se requiere del impulso a una profunda reforma del Poder Judicial en el estado, lo que pasa por la derogación del actual Código Penal, la depuración de los órganos policíacos y la reorganización del sistema carcelario.

En quinto lugar se necesita de una reforma democrática que permita a las agencias municipales nombrar directamente a sus representantes, que incorpore como legítimas las formas de gobierno indígenas y que quite el control gubernamental sobre la organización y calificación de las elecciones. En este marco debe cesar la intervención gubernamental sobre las organizaciones sociales que representan los intereses de indígenas y campesinos. Por lo pronto, y mientras se realizan elecciones locales, los municipios en conflicto deben ser reestructurados.

El petardo chiapaneco

La explosión indígena de Chiapas cimbró de lleno al sistema político mexicano. El debate sobre la vía para solucionar el conflicto (política o militar) y los alcances de las demandas (regionales o nacionales) han dividido el bloque en el poder y perfilan una crisis orgánica en su interior de consecuencias inciertas. Asimismo, ha cuestionado profundamente la relación que debe existir entre las etnias y el Estado, entre las organizaciones sociales y las instituciones gubernamentales y, entre el estado de Chiapas y la Federación.

La nueva fase de lucha rural en Chiapas, la de la guerra campesina, no es compartida por el conjunto de los productores rurales de ese estado. Tampoco participan de ella un conjunto de organizaciones que viven y trabajan en la zona principal del conflicto y que no quiere ser considerada como una fuerza beligerante. Muchas fuerzas fuera de la zona de operaciones militares simpatizan, empero, con la sublevación. Tienen demasiadas cuentas pendientes y ven en esta acción la oportunidad de cobrarlas. El futuro es, sin embargo, incierto. La violencia genera violencia, y los caciques y ganaderos tienen también facturas que cobrar, y ésta es para ellos, la oportunidad de hacerlo: basta con denunciar como zapatistas a sus detractores.

Por lo demás, la guerra campesina de Chiapas anuncia una profunda reorganización del movimiento campesino en el país. La detonación social cimbró al conjunto de organizaciones sociales y parece haber abierto una brecha para una redefinición del sistema político en el país y el rumbo económico que se debe seguir. Chiapas mostró a una parte del país real, esa que no había sido tomada en cuenta en los acuerdos de "modernización" al vapor tomados por mayoriteo en la Cámara de Diputados, que las cosas no pueden seguir siendo iguales.

Muchas de las reformas requeridas para resolver de fondo el conflicto chiapaneco son también acciones necesarias para la modernización nacional. Lo peor que podría suceder es que se hiciera una lectura de la guerra chiapaneca como si las causas que las originaron no estuvieran presentes también en el resto del país. Es el momento de poner a tono el sistema político nacional con la madurez de la sociedad. De no hacerlo, estaremos en riesgo de padecer nuevas explosiones.

La respuesta social

Como un estacazo en el avispero, el levantamiento del EZLN ha provocado un profundo reacomodo de las fuerzas sociales y políticas chiapanecas. Aunque las negociaciones por la paz tienen como actores principales al Gobierno Federal, al EZLN y a los mediadores políticos, alrededor de ellos se han expresado el conjunto de sectores económicos-sociales de ese estado sobre tres cuestiones básicas: la construcción de la paz, las nuevas relaciones de poder y la solución de un conjunto de demandas económicas que suponen una redefinición de las vías de desarrollo. Mientras que unas apuestan por el cambio otras puján por la restauración.

Siete bloques sociales se han hecho presentes en este reacomodo: la oligarquía tradicional (ganaderos, transportistas y grandes comerciantes) asociados a las burocracias corporativas tradicionales (CTM, CROC, CNC,) y a los sectores de la clase política chiapaneca que aún no ha sido “descabezada” (presidentes municipales, caciques locales, etc...). La clase política local “emergente” —especialmente el nuevo gobernador interino—, los funcionarios de las agencias estatales de desarrollo de la Federación (básicamente Sedesol e INI) que han entrado a substituir a los antiguos funcionarios alineados con Patrocinio González Garrido, así como los integrantes de las diversas comisiones especiales para atender el conflicto. El conjunto de las organizaciones campesinas-indígenas del estado que han formado el Consejo Estatal Indígena Campesino (CEIC). Una franja de ciudadanos acuerpados en organizaciones y movimientos cívicos preocupados por los derechos humanos y la libertad política. Las iglesias de diversas denominaciones y, de manera destacada, la Iglesia Católica. Las secciones sindicales magisteriales acuerpadas en el SNTE. Y, con un perfil mucho más bajo, los diversos partidos políticos nacionales presentes en el suelo chiapaneco.

El comportamiento de la oligarquía tradicional ha seguido, puntualmente, sus pautas usuales. Una franja de ella (hoteleros, restauranteros, propietarios) reclamó —y obtuvo del Gobierno Federal— indemnización económica por los daños “sufridos”. Otros —los grandes ganaderos— se aprestan a recibirla magnificando sus pérdidas. Mientras tanto la CNC ha pedido que la anunciada derrama económica se haga a través de sus instancias. Avalando la presencia del Ejército Mexicano han señalado a gritos, tomando incluso las calles en Ocosingo y San Cristóbal, la necesidad de su permanencia y avance sobre las áreas controladas por el EZLN, al tiempo que se lanzan de lleno en contra de Don Samuel Ruiz. Públicamente han considerado que la defensa de los derechos humanos son un obstáculo en el restablecimiento del orden. Han señalado como zapatistas a sus oposiciones históricas —Oxchuc y Las Margaritas son sólo un par de casos entre otros muchos— y propiciado que se les reprima. Han propiciado que dentro de las comunidades en conflicto la población



FOTO: ARTURO G. CAMPOS/ICONOS.

no beligerante huya, preparando así el terreno para una acción militar contrainsurgente. En el Soconusco han tomado las sucursales de los bancos buscando la renegociación de sus carteras vencidas. En suma, la paz que quieren es la paz de los sepulcros, la que nace del aplastamiento de la rebelión y la que lleve al crecimiento de sus cuentas bancarias.

La acción de la “familia chiapaneca” emergente y los funcionarios federales se enfrenta, por decir lo menos, a una enorme descoordinación, cuando no a una disputa por las nuevas clientelas. Si hoy es claro quiénes son los que negocian la paz, no lo es, en absoluto, cuál es la ventanilla que los ciudadanos o los productores rurales deben tocar, o, a cual de todas las que se acercan a ellos deben hacerle caso para solucionar sus demandas: ¿los funcionarios que se van a los que llegan? ¿los federales o los estatales? ¿los de las comisiones especiales o los fijos? Dos hechos adicionales ayudan poco a aclarar esta situación: uno, es la distorsión que provoca la presencia en la Comisión Especial del Senador Robledo Rincón a quien insistentemente se le ha señalado como el próximo candidato a gobernador por el PRI en el estado. Aunque su fuerza política es evidente su función ha sido interpretada por otros acuerpamientos como un “posicionamiento” por adelantado ante la próxima contienda electoral. Otro, es la lentitud con la que se ha respondido a las demandas campesinas por remover a 15 Presidentes Municipales.

Queda aún por precisar si la intervención de ambos estará marcada por un ánimo de restauración o de reformas. Si lo que buscan es aislar a las fuerzas insurgentes y ganar tiempo o proporcionar soluciones de fondo.

La formación del *CEIC* con la representación de 280 organizaciones campesinas e indígenas pone en el centro de solución del conflicto chiapaneco a una amplia franja de organizaciones sociales. Aunque muchas de esas organizaciones son "fantasmas" o su membresía es muy limitada, están allí representadas los destacamentos campesinos más relevantes de la sociedad rural de ese estado. A los ojos de algunos, en el *CEIC* está la posibilidad de "civilizar" la confrontación y de contar con una base social real para implementar las reformas necesarias. Para otros, en cambio, se trata de una iniciativa que busca aislar al *EZLN* "fabricando" interlocutores gubernamentales aislados. Hasta el momento, y a pesar de que en sus filas están presentes organizaciones campesinas tradicionales, ha acordado plantear un programa de lucha que rebasa en mucho el peticionismo económico tradicional y ha señalado que comparte las demandas del *EZLN*.

Cada vez más activas en el ámbito nacional, las *ONGs* que trabajan por los derechos humanos y la democratización integral del país han jugado un papel relevante en el conflicto chiapaneco. Vinculadas por años a los circuitos que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos internacionalmente y articuladas a los medios masivos de comunicación, han desempeñado una función de gran relevancia al documentar las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, servir como correas de transmisión con sus contrapartes nacionales e internacionales y exigir el cese al fuego. Estas organizaciones cívicas son hoy uno de los instrumentos principales en la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

Si durante muchos años las diversas iglesias fueron un canal de expresión del descontento rural y de cobertura a sus luchas —sobre todo la Diócesis de la Iglesia Católica de San Cristóbal—, el papel que han jugado en "amortiguar" el conflicto y buscar salidas negociadas ha sido definitivo. La gran mayoría de ellas ubicó el estallido social en el marco de las condiciones de pobreza, marginación y opresión de los indígenas chiapanecos, y algunos más lo asociaron incluso con las políticas económicas dominantes. Después de haber sido vilipendiado por la clase política local, Don Samuel Ruiz apareció en el escenario como una de las piedras angulares de una salida negociada. La enorme autoridad moral de que goza ante creyentes y no creyentes, su preocupación por el bienestar y la educación de los habitantes de la región lo han convertido en el canal de comunicación prácticamente exclusivo entre el *EZLN* y los negociadores gubernamentales.

El magisterio estatal, agrupado en las secciones sindicales 7 y 40 del *SNTE*, ha vivido el conflicto entre las luces y las sombras de sus desgarramientos internos. Aunque sus dirigentes nacionales y seccionales orientaron para convertirlo en una fuerza por la paz, su escasa

respuesta en el lugar de los hechos muestra, una vez más, el poco valor de los acuerdos cupulares, por más justos que parezcan. Sus dirigencias estatales están atravesadas por múltiples disputas por la conducción sindical, y sus bases se encuentran divididas entre los seguidores de la dirigencia oficial, la oposición radical, y, un amplio sector desmovilizado que teme que la iniciativa de paz de la dirigencia nacional sea una artimaña de su Secretaria General para ganar presencia política en su estado natal. Por lo demás, en coyunturas como éstas, siempre surge la duda del papel que deben jugar las demandas propias y el temor de la dirigencia a ser rebasada por las bases descontentas. En ese contexto, la fuerza magisterial ha tenido poco impacto. Otra historia, por dilucidarse aún, es el papel que juegan los maestros bilingües en la zona de conflicto.

Sobre los partidos políticos poco puede decirse. Estatalmente han sido desbordados y sólo la presencia de sus candidatos a la presidencia de la República —y de algunos legisladores federales— les han dado presencia e interlocución.

Pero, por más que se trate de aislar el conflicto chiapaneco a "cuatro municipios" de ese estado, es evidente que se trata de un problema nacional. Sin la "crítica de las armas" el "compromiso por la paz, la democracia y la justicia" signado por ocho partidos políticos nacionales que abre esperanzas a la posibilidad de realizar elecciones limpias en nuestro país difícilmente se habría producido. Ciertamente, el compromiso no fue negociado con el *EZLN* de la misma manera en la que los artículos 27 y 123 no fueron pactados por el constituyente sobre la base de una negociación con los ejércitos de Villa y Zapata pero, en uno y otro caso, la presencia de una fuerza armada campesina forzaron a caminar por esa vía.

Queda aún por ver si lo que pretende el Ejecutivo es encarar el conflicto ganando tiempo, aislando al *EZLN* de sus simpatías nacionales y estatales, al tiempo que se busca "drenar" a la población civil en el área de guerra, para, sobre esta base desatar una ofensiva militar que desmantele la insurrección, o, si por lo contrario, se trata de iniciar una reforma de fondo a la política de este país. Evidentemente la respuesta dependerá de la forma en la que se dé solución a las demandas locales nacionales. Pero los indicadores para saberlo son precisos: si en Chiapas hay voluntad verdadera de construir la paz resolviendo los problemas que propiciaron la guerra se tendrán que afectar los intereses de quienes apuestan a la restauración. Las fuerzas sociales capaces de impulsarlo desde abajo existen y tienen la madurez para procesarlo. Pero ello pasa también por abrir el cauce a una verdadera democratización del país pactada no sólo con los partidos políticos nacionales —que deben evidentemente participar en ella de manera destacada—, sino, incorporando también a la negociación al conjunto de fuerzas político-sociales relevantes que actúan en nuestro país. Sólo así el avispero que ha levantado el vuelo podrá regresar a la tranquilidad.